



Roj: **STSJ CAT 12346/2017 - ECLI: ES:TSJCAT:2017:12346**

Id Cendoj: **08019330052017100962**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Barcelona**

Sección: **5**

Fecha: **20/12/2017**

Nº de Recurso: **495/2014**

Nº de Resolución: **946/2017**

Procedimiento: **Contencioso**

Ponente: **JOSE MANUEL DE SOLER BIGAS**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA

SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

SECCIÓN QUINTA

Recurso nº 495/2014

SENTENCIA Nº 946/2017

Ilmos. Sres.:

Presidente

DON ALBERTO ANDRÉS PEREIRA

Magistrados

DON JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS

DON FRANCISCO SOSPEDRA NAVAS

DOÑA ANA RUBIRA MORENO

DON EDUARDO PARICIO RALLO

En la ciudad de Barcelona, a 20 de diciembre de 2017.

LA SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CATALUÑA (SECCIÓN QUINTA) ha pronunciado la siguiente SENTENCIA en el Recurso ordinario nº 495/2014, interpuesto por los siguientes AYUNTAMIENTOS, representados por el Procurador de los Tribunales D. Javier Segura Zariquiey y defendidos por Letrada:

BARBERÀ DEL VALLÈS, CAMPRODÓN, CANOVELLES, CASTELLAR DEL VALLÈS, CASTELLBELL I EL VILAR, CERDANYOLA DEL VALLÈS, LLEIDA, MONTMELÓ, MONTSENY, OLESA DE MONTSERRAT, PINEDA DE MAR, PONT DE VIOMARA I ROCAFORT, EL PRAT DE LLOBREGAT, RIPOLLET, RUBÍ, SANT ADRIÀ DE BESÒS, SANT BOI DE LLOBREGAT, SANT CEBRIÀ DE VALLALTA, SANT CELONI, SANT ESTEVE SESROVIRES, SANT LLORENÇ D#HORTONS, SANTA COLOMA DE GRAMENET, SANTA PERPETUA DE MOGODA, TARRAGONA, EL VENDRELL y VILADECANS.

Es parte demandada la GENERALITAT DE CATALUNYA, DEPARTAMENT D'ENSENYAMENT, representada y defendida por la Abogada de la Generalitat.

Ha sido Ponente el Magistrado Ilmo. Sr. D. JOSÉ MANUEL DE SOLER BIGAS, quien expresa el parecer de la Sala.

ANTECEDENTES DE HECHO



PRIMERO - Por la representación procesal de los Ayuntamientos actores se interpuso recurso contencioso-administrativo, en fecha 30 de diciembre de 2014, contra la desestimación por silencio, por parte del Departament d'Ensenyament de la Administración demandada, del requerimiento formulado por los primeros, en fecha 30 de septiembre de 2014, y por el Ayuntamiento de Tarragona en fecha 20 de octubre de 2014, en ambos casos, a los efectos del art. 44.1 de la LJCA .

Desestimados los requerimientos, respectivamente, mediante resoluciones de la Consellera d'Ensenyament de 25 y 26 de mayo de 2015, en virtud de Auto de fecha 17 de septiembre de 2015 se amplió el objeto del proceso a dichas resoluciones expresas.

SEGUNDO - Evacuada la demanda ampliada por la parte actora en fecha 16 de noviembre de 2015, y la contestación a dicha demanda por la parte demandada en fecha 15 de enero de 2016, mediante Auto de 26 de abril de 2016 se acordó la apertura de un período de prueba, continuando subsiguientemente el proceso por el trámite de conclusiones sucintas que evacuaron las partes, señalándose para deliberación, votación y fallo, el 9 de mayo de 2017.

TERCERO - No obstante, mediante Providencia dictada en fecha 25 de mayo de 2017 se acordó que,

"Con SUSPENSIÓN del plazo para dictar Sentencia, se acuerda en esta alzada, como diligencias finales o para mejor proveer, las siguientes:

1) Con arreglo a la doctrina constitucional derivada de la STC 12/2017, de 30 de enero, FJ 5º, puesta en relación con la doctrina jurisprudencial que se reseña en la Sentencia de esta Sala y Sección de 13 de diciembre de 2015, rec. 215/2014, FJ 3º.

Se requiere a la parte actora a fin de que en el plazo de DIEZ DIAS que se confiere al efecto, acredite el cumplimiento por cada uno de los Ayuntamientos recurrentes, del requisito de informe jurídico preceptivo, contemplado en el art. 54.3 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, en relación con el art. 179 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril.

2) Diríjase oficio a la Administración demandada, a fin de que igualmente en el plazo de DIEZ DIAS, aporte al proceso el texto íntegro de los acuerdos concertados entre la Generalitat de Catalunya y la Diputació de Barcelona, para la financiación de los centros educativos de primer ciclo de educación infantil, de titularidad municipal, correspondientes a los cursos 2012-2013, 2013-2014, y en su caso, 2014-2015".

Mediante Providencia dictada en fecha 8 de junio de 2017, se acordó a su vez que,

"Con mantenimiento de la suspensión del plazo para dictar sentencia acordada por providencia de fecha 25 de mayo de 2017, se acuerda en esta alzada, como diligencia final o para mejor proveer, la siguiente:

Diríjase oficio a la Administración demandada, a fin de que en el plazo de DIEZ DIAS, aporte al proceso el texto íntegro de los acuerdos concertados entre la Generalitat de Catalunya y las Diputaciones de Tarragona, Lleida y Girona, para la financiación de los centros educativos de primer ciclo de educación infantil, de titularidad municipal, correspondientes a los cursos 2012-2013, 2013-2014, y en su caso, 2014-2015".

Y mediante Providencia de fecha 29 de junio de 2017 se acordó que,

"...por presentados por las partes personadas los anteriores escritos y documentación anexa, en relación con lo acordado mediante Providencias de 25 de mayo y 8 de junio de 2017, únense a los autos y dése a las copias el destino legal.

Se confiere a dichas partes personadas un plazo común de CINCO DIAS, a los efectos del art. 61.4 LJCA y art. 436.1 LEC".

Finalmente, mediante Providencia de 29 de septiembre de 2017, se señaló nuevamente para deliberación, votación y fallo, el 14 de noviembre de 2017.

CUARTO - En la sustanciación del presente procedimiento se han observado y cumplido las prescripciones legales.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO- A) Constituye el objeto ampliado del proceso, según se ha reseñado, la impugnación por los Ayuntamientos actores:

a) De la resolución dictada por la Consellera d'Ensenyament en fecha 25 de mayo de 2015, por la que acordó *"Desestimar en la seva totalitat el requeriment previ a la jurisdicció contenciosa-administrativa, presentat, en data 30 de setembre de 2014..."*(por dichos Ayuntamientos, excepto el de Tarragona).



b) De la resolución dictada por la Consellera d'Ensenyament en fecha 26 de mayo de 2015, en el mismo sentido y en lo que respecta al requerimiento previo formulado en fecha 20 de octubre de 2014 por el Ayuntamiento de Tarragona.

B) Solicita la parte actora, en el suplico del escrito de demanda ampliada, que se declare:

1) " *L'obligació del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya de complir el mandat legal del l'art. 189.2 (quiso decir, art. 198.2) de la Llei 12/2009, de subvencionar el sosteniment de les llars d'infants municipals*".

2) " *L'habilitació d'un termini prudencial de sis mesos per a l'adopció de les accions de govern necessàries per al compliment d'aquest mandat, entre les que s'ha de preveure la rehabilitació de la partida pressupostària "460.0007 Funcionament llars d'infants municipals", corresponent als pressupostos de 2012, 2013 i 2014, no assignades a tal fi, i la creació de partida pressupostària suficient i justificada, corresponent a l'exercici 2015 i següents, a consignar en el pressupost anual de la Generalitat de Catalunya que s'hagi de tramitar i aprovar, l'exercici següent al dictat de la Sentència, si no fora possible habilitar el crèdit abans*".

3) " *L'habilitació d'un tràmit adicional de sis mesos, des de l'aprovació del pressupost o habilitació anticipada de crèdit, per tal que s'aprovin acumuladament les línies de subvenció, els Convenis resultants, o bé els acords que els substitueixin, per a la liquidació efectiva, prèvia acreditació municipal de les despeses incorregudes pels Ajuntaments demandants, en el sosteniment de les llars d'infants municipals, durant els cursos escolars 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 i següents, en el seu cas, amb una ràtio/alumne no inferior a 1.300 euros, equivalent a l'import fixat en els darrers Convenis (2011-2012), signats per Departament*".

C) La representación procesal de la Administración demandada, en el escrito de contestación a la demanda interesa, como cuestión previa, la inadmisión del presente recurso contencioso, ex art. 69 b) LJCA, por "manca d'existència d'informe jurídic previ", y subsidiariamente la desestimación del recurso.

SEGUNDO - 1) El alegato de inadmisibilidad del recurso contencioso lo fundó la parte demandada, en el escrito de contestación a la demanda, en las previsiones,

a) Del art. 54.3 del R.D. Legislativo 781/1986, de 18 de abril, T.R. de las Disposiciones Legales Vigentes en materia de Régimen Local, a cuyo tenor:

"Los acuerdos para el ejercicio de acciones necesarias para la defensa de los bienes y derechos de las Entidades locales deberán adoptarse previo dictamen del Secretario, o, en su caso, de la Asesoría Jurídica y, en defecto de ambos, de un Letrado".

(Previsión que se reproduce en el art. 221.1 del R.D. 2568/1986, de 28 de noviembre, ROF).

b) Del art. 179 (" Informe previo de secretario e interventor ") del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 de abril, T.R. de la Ley municipal y de régimen local de Cataluña, conforme al cual:

"1. Es necesario el informe previo del secretario o secretaria de la corporación y, en su caso, del interventor o interventora, o de quien legalmente los sustituya, para adoptar los acuerdos siguientes:...

2. Es también necesario el informe previo en los supuestos en que lo establece la legislación de régimen local y, en su caso, la legislación sectorial".

2) Pues bien. El requisito contemplado en los anteriores preceptos legales, ha sido cumplimentado por la parte actora -requerida al efecto mediante la transcrita Providencia de fecha 25 de mayo de 2017-, válidamente en los términos de la STC 12/2017, de 30 de enero, FJ 5º, obrando en los autos documentación relativa a los 26 Ayuntamientos recurrentes (respectivamente, fols. 520, 528, 532, 533, 624, 541, 549, 557, 562, 625, 575, 577, 626, 632, 585, 590, 641, 591, 649, 593, 601, 603, 607, 612, 614 y 659), de la que resulta en cada caso la existencia de los necesarios informes del Secretario municipal, o Secretario Interventor, o la ratificación por aquéllos de los informes jurídicos previamente emitidos, en relación con la interposición del recurso contencioso, que por tanto debe ser admitido.

TERCERO - 1) Entrando en el fondo del asunto, resulta de lo actuado que la Administración demandada suscribió en fecha 19 de noviembre de 2010, con la Federació de Municipis de Catalunya y la Associació Catalana de Municipis, un Acuerdo Marco, " referent al finançament del sosteniment de les places públiques de Llars Infantils de titularitat de les Corporacions locals ", de cuyo contenido es pertinente transcribir, en relación con este proceso, los siguientes particulares:

a) De la parte expositiva.

"5. L'article 198.2 de la Llei d'Educació, estableix que als efectes del que preveu l'article 56.5, i preferentment per a satisfer les necessitats d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en



zones rurals, d'acord amb la programació i els requisits que s'hagin establert prèviament, **el Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment** de places per a infants de zero a tres anys en llars infantils de titularitat municipal.

6. El Govern, en la sessió del dia 16 de novembre de 2010, ha acordat aprovar la subscripció d'aquest Acord Marc".

b) Del clausulado.

"Primera. El Departament d'Educació contribuirà al finançament de la despesa corrent ocasionada per funcionament de les llars infantils de titularitat de les corporacions locals.

Segona. Durant el curs 2010-2011, l'import establert per al finançament del sosteniment d'aquestes places serà de 1.800`00 per alumne equivalent".

2) Para el curso siguiente, 2011-2012, en virtud de los diferentes Convenios suscritos con cada uno de los Ayuntamientos, dicha financiación se fijó en 1.300 euros por alumno y curso.

3) A partir de curso 2012-2013 y durante los cursos 2013-2014 y 2014-2015, la Administración demandada dejó de subvencionar las plazas de Llars Infantils de referencia.

Las partidas presupuestarias destinadas inicialmente a esta finalidad, de 47.599.399,88 euros para 2012, 47.599.399,88 euros para 2013 (posteriormente ampliada), y 45.000.000 euros para 2014, fueron aplicadas a actuaciones estimadas prioritarias por la Administración demandada, entre ellas el pago de las obligaciones derivadas de los Conciertos educativos, y de los Convenios suscritos con los Ayuntamientos en relación con las Llars Infantils, hasta el curso 2011-2012, inclusive (certificación emitida por la Directora de Serveis d'Ensenyament, fol. 450 de los autos).

De manera que las cantidades inicialmente reclamadas por algunos de los Ayuntamientos recurrentes, por deudas derivadas de los citados Convenios, ya no fueron objeto de la demanda ampliada.

4) La Administración demandada alega en el proceso haber sido sustituida, en la financiación de las Llars Infantils de referencia, por las cuatro Diputaciones catalanas.

Requerida en relación con lo antedicho, en los términos de las Providencias dictadas en fechas 25 de mayo y 8 de junio de 2017 (antecedente 3º de esta Sentencia), la Administración demandada precisó que *"no existeix acord atès que la planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil no és competència de la Generalitat de Catalunya...sinó que correspon als governs locals(no obstante) Es van establir acords financers verbals, en el marc de les negociacions polítiques, amb les quatre diputacions per a l'ajut al sosteniment de les llars infantils municipals a partir del curs 2012-2013, per tal de no deixar d'atendre les despeses de funcionament de les llars tot i la insuficiència de recursos econòmics del Govern"* (fol. 515 de los autos).

5) La Administración demandada sostiene que la financiación de las cuatro Diputaciones fue de 875 euros por alumno y curso, durante los cursos 2012-2013, 2013-2014 y 2014- 3015.

La parte actora afirma, por contra, que la antedicha suma era un máximo, así previsto en las diferentes convocatorias de subvenciones anunciadas por las Diputaciones, siendo inferiores las cantidades percibidas por los Ayuntamientos recurrentes.

No consta acreditada la realidad de lo antedicho, esto es, las cantidades percibidas por cada uno de los Ayuntamientos demandantes, de la cuatro Diputaciones catalanas, durante los tres cursos de referencia, cuestión que quedará diferida a la ejecución de Sentencia, en los términos del Fallo que seguirá y en congruencia con lo postulado por la parte actora, a tenor del escrito presentado en fecha 10 de julio de 2017, donde precisa que:

"Aquesta obligació (de la Administración demandada, objeto de la demanda) s'ha de complir, amb la mateixa ratio de 1.300 euros/alumne, fixada en els darrers Convenis signats pel Departament (curs 2011.2012), per no haver estat formalment modificada (inactivitat), i sense perjudici de compensar acreditadament i en execució de Sentència, les quantitats percebudes pels Ajuntaments demandants, en el mateix concepte, per les Diputacions Provincials a fi d'evitar un enriquiment injust, que no està en l'objecte del recurs".

CUARTO - 1) Partiendo de los hechos reseñados, la cuestión jurídica que se dilucida en el proceso, sobre las que se extienden los escritos de demanda y contestación, es si corresponde o no legalmente a la Administración demandada, la obligación de subvencionar el sostenimiento de las Llars Infantils de titularidad municipal, con arreglo al marco normativo de aplicación al caso, que tiene como primera expresión:

a) La Disposición Final Primera de la LP 5/2004, de 9 de julio, de creación de guarderías de calidad, a cuyo tenor,



"El Gobierno **debe dotar** las partidas presupuestarias necesarias en los presupuestos de la Generalidad a fin de cumplir, en los plazos establecidos, lo dispuesto por la presente Ley".

b) El art. 198.2 (" *Financiación del primer ciclo de educación infantil* ") de la LP 12/2009, de 10 de julio, de Educación, conforme al cual,

"A efectos de lo establecido en el art. 56.5, y preferentemente para satisfacer las necesidades de escolarización de niños en entornos socioeconómicos o culturales desfavorecidos y en zonas rurales, de acuerdo con la programación y los requisitos que se hayan establecido previamente, el Departamento **debe subvencionar** la creación, consolidación y sostenimiento de plazas para niños de cero a tres años en guarderías de titularidad municipal".

2) Se han dictado por esta Sala y Sección, Sentencias con objeto asimilable al presente, en fechas 17 de noviembre de 2017, rec. 448/2014, 17 de noviembre de 2017, rec. 476/2014 y 22 de noviembre de 2017, rec. 412/2014.

En la primera de ellas, se razonó lo siguiente:

"SEGON.- Així doncs, el nucli d'aquest recurs consisteix en determinar en quina mida la Generalitat de Catalunya queda obligada a finançar el servei d'educació infantil, primer cicle de 0 a 3 anys, específicament el servei prestat per l'Ajuntament recurrent mitjançant les llars d'infants que gestiona.

L'article 131 de l'Estatut d'Autonomia de Catalunya atribueix a la Generalitat la competència exclusiva en matèria d'ensenyament infantil en els aspectes que es relacionen a l'apartat 2/, i específicament la competència sobre el règim de sosteniment amb fons públics dels ensenyaments del sistema educatiu i dels centres que els imparteixen.

En aquest sentit, la Generalitat assumeix la condició d'administració educativa i li correspon la responsabilitat general d'execució en aquesta matèria, responsabilitat que inclou el seu finançament -article 155 de la Llei orgànica 2/2006, d'educació-, especialment en allò que afecta els centres públics -article 112 de la mateixa Llei-.

Els municipis per al seva banda han assumit tradicionalment un posició relativament tangencial en matèria d'ensenyament, al menys en allò que es referix a la titularitat de competències pròpies. La legislació ha limitat històricament aquest paper a la posta a disposició dels solars per a la construcció i el manteniment dels centres d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial (disposició addicional 15 de la Llei orgànica 2/06), sense perjudici de l'assumpció d'altres funcions o serveis en col·laboració amb l'administració educativa, molts cops de suplència. En aquest sentit, i en allò que ací interessa, l'article 27 de la Llei 7/85 de bases del règim local preveu la possibilitat que les comunitats autònomes puguin delegar les seves competències en determinades matèries, entre les mateixes, la relativa a la creació, manteniment i gestió de les escoles infantils d'educació de titularitat pública de primer cicle d'educació infantil, com és el present cas.

La fixació precisa del sistema competencial dels municipis queda reenviat per la legislació bàsica a la normativa sectorial. En allò que es refereix a l'ensenyament infantil és el mateix Estatut d'autonomia que atribueix als governs locals la competència sobre la planificació, l'ordenació i la gestió de l'educació infantil com a competència pròpia. La legislació ordinària no ha arribat a concretar a quin nivell de l'administració local pertoca exactament aquesta competència. Tanmateix es pot deduir inicialment que, d'acord amb els criteris establerts a l'article 66.4 de la Llei municipal i del règim local de Catalunya, aquesta competència ha de correspondre als Ajuntaments, si mes no els que disposen de capacitat de gestió suficient, com és el cas.

El cas és que la titularitat de la competència no exclou que les administracions superiors, específicament la Generalitat de Catalunya, quedin deslliurades de tota responsabilitat financera.

En efecte, un dels principis que informa el règim local és el de suficiència financera, principi que queda ancorat a la mateixa Constitució espanyola -article 142- i a l'Estatut d'Autonomia -articles 217 i 219-. En aquest sentit, l'ordenament garanteix a les administracions locals la disponibilitat de recursos suficients, be a partir de dels recursos tributaris, o be a partir de transferències de les administracions superiors, concretament mitjançant la participació en els tributs de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, i també a partir de les subvencions provinents d'un i altre nivell de govern -articles 2, 39 i 40 de la Llei d'Hisendes locals, Reial Decret legislatiu 2/04-.

El principi de suficiència financera es projecta en tota l'activitat municipal sigui en relació a les competències pròpies o delegades. En aquesta direcció cal esmentar particularment l'article 219 de l'Estatut d'autonomia, precepte que garanteix als governs locals la disponibilitat dels recursos suficients per a afrontar la prestació dels serveis la titularitat o la gestió dels quals se'ls traspassi o se'ls delegui, afegint que tota nova atribució de competències ha d'anar acompanyada de l'assignació dels recursos suplementaris necessaris per a finançar-les correctament, de manera que es tingui en compte el finançament del cost total i efectiu dels serveis traspassats.



Fins i tot s'estableix que el compliment d'aquest principi és una condició necessària perquè entri en vigor la transferència o la delegació de la competència.

La legislació bàsica és així mateix prou explícita en aquest sentit. Així, en l'àmbit de les competències pròpies, l'article 25 de la Llei 7/85 determina que la Llei que atribueixi la competència ha de preveure necessàriament la dotació dels recursos necessaris per a garantir la suficiència financera de les entitats locals, de forma que s'eviti una major despesa a les Administracions.

Pel que fa a les competències delegades, l'article 27 de la mateixa Llei de bases del règim local disposa en el mateix sentit que la resolució de delegació haurà de determinar els medis personals, materials i econòmics que l'Administració delegant atribueixi, sense que pugui suposar una major despesa per a les Administracions.

Per tant, el plantejament de la normativa general és ben clara en garantir que l'atribució de competències a les Administracions locals imposa indefugiblement l'atribució dels recursos corresponents. En conseqüència es indiferent que en el cas de l'educació infantil estiguem davant una competència delegada en els termes de la Llei de bases del règim local, o bé una competència atribuïda com a pròpia per l'Estatut d'Autonomia. El cas és que la Generalitat va anar convenint amb l'Ajuntament recurrent la creació de successives llars d'infants i la correlativa assumpció de la competència de gestió, situació que comporta la necessitat de transferir els recursos econòmics corresponents en els termes de la normativa esmentada.

La legislació d'ensenyament reitera l'anterior plantejament. En efecte, l'article 1 de la Llei 5/2004, de creació de llars d'infants de qualitat, incorpora les llars d'infants municipals a la xarxa de titularitat pública i el article 4 les considera part del sistema educatiu, circumstància que comporta la responsabilitat financera de l'administració educativa segons allò que disposen l'article 112 de la Llei orgànica 2/2006 i l'article 204 de la Llei 12/09 d'educació. La mateixa disposició final primera de la Llei 5/04 imposa al Govern la responsabilitat de dotar les partides pressupostàries necessàries en els pressupostos de la Generalitat a aquests efectes.

En el mateix sentit es manifesta la Llei 12/2009, d'educació. Així, l'article 42.3 determina que el sosteniment dels centres públics ha de quedar establert als pressupostos de la Generalitat amb un criteri de suficiència, criteri que han de seguir també els convenis que l'Administració educativa subscriu amb l'Administració local. Mes concretament, l'article 198.1 disposa que el Departament ha d'establir una oferta de places per a infants de zero a tres anys, i l'apartat 2/ preveu específicament que el mateix Departament ha de subvencionar la creació, la consolidació i el sosteniment de places per a infants de zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal, sense perjudici que doni preferència a les necessitats d'escolarització d'infants en entorns socioeconòmics o culturals desfavorits i en zones rurals.

I, així, el Departament va actuar coherentment amb l'anterior mandat en establir els corresponents convenis i subvencions amb l'ajuntament recurrent des de l'any 1997, convenis en els que hom reconeix que el seu objectiu era el de complir el mandat de l'article 198.2 de la Llei 12/09 i que la subvenció atorgada estava destinada a minorar les quotes del servei d'ensenyament de les llars d'infants de titularitat municipal per al curs corresponent.

En definitiva, cal concloure que la Generalitat de Catalunya manté una responsabilitat financera respecte les llars d'infants gestionades per l'Ajuntament recurrent, responsabilitat que en el seu moment va canalitzar mitjançant els convenis i subvencions concedides anualment i que sobtadament va deixar d'assumir a partir del curs 2012-13, amb infracció de l'ordenament.

TERCER.- Segons que ha acreditat el perit de designació judicial que ha informat en aquest procés, el cost total de les escoles bressol al municipi recurrent va ser de 2.326.500,28 euros al curs 2012-13; 2.279.772,17 euros al curs 2013-14; i 2.256.805,49 euros al curs 2014-15; amb un cost per alumne i curs de 6.356,58 euros, 6.228,89 euros i 6.166,14 euros respectivament.

Segons la demandada, l'actora va percebre de la Diputació de Barcelona els cursos 2012-13, 2013-14 i 2014-15 subvencions per import de 875 euros per alumne.

Alhora, de la documentació aportada pel perit judicial es desprèn que el preu públic per alumne a la llar d'infants el cursos 2013-14 i 2014-15 era de 164,22 euros mensuals des del mes de setembre al mes de juliol, mes una quota única per material de 83,23 euros, amb un total per curs de 1.889,65 euros. A banda, els usuaris abonaven directament al concessionari les despeses de menjador i acollida.

Per tant, durant el període esmentat el gruix del finançament del servei era assumit pel municipi. Per exemple, els cursos 2013-14 i 2014-15, l'ajut per alumne de la Diputació de Barcelona va ser de 875 euros i l'ingrés derivat del preu públic, de 1.889,95 euros, amb un dèficit en relació al cost acreditat pel perit de 3.463,94 euros i 3.401,19 euros per alumne, dèficit que va haver d'assumir el municipi, sense que la Generalitat ajudés en res.

Per tant, cal descartar les al·legacions de la demandada en el sentit que el servei estaria atès a partir de es subvencions de la Diputació de Barcelona o del preu públic abonat pels usuaris. Certament, la Diputació de



Barcelona va aportar uns ajuts durant els exercicis en els que la Generalitat va deixar de finançar el servei, però no hi ha base per considerar que aquests ajuts provincials es fessin per compte i en substitució de la Generalitat de Catalunya. Cal considerar en aquest sentit que la Diputació va actuar en compliment d'una competència pròpia de cooperació amb els Ajuntaments d'acord amb allò que disposa l'article 36 de la Llei 7/85, de bases del règim local-, de forma que els recursos econòmics que la Diputació aporta als municipis son recursos propis del sistema local i el seu sentit és el de ajudar als Ajuntaments a suportar la seva càrrega financera, no la de la Generalitat que té una responsabilitat pròpia i autònoma pel que fa al finançament municipal. En definitiva, l'Ajuntament va haver de suportar més de la meitat del cost del servei.

Hom reclama en aquest sentit que es reconegui al municipi el dret a percebre la quantitat de 1.800 euros per alumne i curs, que és la subvenció que la demandada va atribuir al curs 2009-10, encara que els següents cursos es va reduir la subvenció a 1.600 euros el curs 2010-11, i a 1.300 euros el curs 2011-12.

En allò que es refereix a la determinació de la concreta quantitat que ha de ser objecte de finançament, la normativa esmentada al fonament anterior es refereix en general a la suficiència de les aportacions en funció dels costos. L'article 42.3 de la Llei 12/09 s'expressa també en aquesta línia, i l'article 204.2 d'aquesta mateixa Llei determina en aquest sentit que cal prendre com a referent els criteris aplicats als centres anàlegs de titularitat de la Generalitat, establint la disposició addicional quarta la necessitat de revisar periòdicament les aportacions d'acord amb l'evolució dels costos.

No és menys cert que, dins els límits que imposa el principi de suficiència, cal admetre un marge de la Generalitat de Catalunya per determinar la intensitat del finançament d'aquest servei en el marc de la política pressupostària. D'altra banda, no consta en aquest cas quins son els costos de les llars d'infants de la Generalitat de Catalunya que caldria prendre com a paràmetre de referència segons que s'ha esmentat.

En aquest context, s'estima procedent estar al finançament establert al darrer conveni, això és, a la quantitat d e 1.300 euros per alumne equivalent i curs, quantitat que en el seu moment va ser acceptada per l'Ajuntament, sense que s'hagi acreditat una variació de costos significativa des del curs 2010-11 que pugui justificar la necessitat de revisar l'anterior mòdul.

Pel que fa als interessos, cal admetre la seva procedència des de la seva reclamació en allò que es refereix al curs 2011-12 respecte el qual el finançament estava quantificat ja al conveni. No correspon en canvi reconèixer el dret als interessos en allò que es refereix als cursos següents atès que la quantitat del deute no ha estat líquida fins aquesta mateixa sentència.

No es considera procedent la condemna a l'Administració a signar els corresponents convenis doncs, independentment que aquesta sigui la tècnica de relació a la que es remet la normativa sectorial als efectes d'establir el sosteniment dels centres docents, l'obligació que ací es reclama es limita al finançament del servei; obligació aquesta que no necessita canalitzar-se necessàriament mitjançant conveni. D'altra banda, poc sentit tindria la subscripció de convenis un cop finalitzats els cursos corresponents".

QUINTO - 1) Procede conforme a un criterio de unidad de doctrina estar aquí a los anteriores razonamientos, con la consiguiente estimación del primero de los pedimientos contenidos en el suplico de la demanda (FJ 1º precedente).

Bien entendido que, interpuesto el recurso contencioso (30 de diciembre de 2014), durante el curso escolar 2014-2015, no procede efectuar pronunciamientos intemporales, más allá de dicho curso, lo que "queda fuera de l'objecte del procés i hi haurà que aplicar la normativa vigent en el seu moment, sense que pugui fer-se una condemna de futur" (Sentencia de esta Sala y Sección ya citada, de 22 de noviembre de 2017, rec. 412/2014 , FJ 3º in fine).

2) En cuanto a los dos restantes pedimientos, la Administración demandada dispone de un margen de discrecionalidad para decidir las medidas de orden presupuestario y las demás necesarias para el cumplimiento de lo acordado en esta Sentencia, una vez se establezcan, en ejecución de la misma, las cantidades adeudadas a cada uno de los Ayuntamientos recurrentes, de modo que, con arreglo al art. 71.2 in fine LJCA , no procede pronunciarse en el sentido interesado por la parte actora, apartados 2) y 3) del suplico de su demanda, debiendo estarse al respecto a las previsiones de los arts. 104 y 106 de la LJCA .

3) Siendo parcial la estimación del recurso contencioso, no procede la condena en costas a ninguna de las partes, con arreglo al art. 139.1 LJCA .

VISTOS los preceptos legales citados y demás de general y pertinente aplicación.

FALLAMOS



En atención a todo lo expuesto, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (Sección Quinta) ha decidido:

1º.- ESTIMAR PARCIALMENTE el presente recurso contencioso, interpuesto por la parte actora contra las resoluciones dictadas por la Consellera d'Ensenyament de la Administración demandada, en fechas 25 y 26 de mayo de 2015, las cuales SE ANULAN por no estimarse conformes a derecho.

2º.- RECONOCER a los Ayuntamientos recurrentes, el derecho a percibir de aquélla la suma de 1.300 euros, por alumno de las Llars Infantils de titularidad municipal, en relación con los cursos escolares 2012-13, 2013-14 y 2014-15.

La cantidad que corresponda a cada Ayuntamiento se fijará en ejecución de Sentencia, debiendo practicarse en cada caso la compensación a que se contrae el FJ 3º in fine de esta Sentencia.

3º.- DESESTIMAR el recurso contencioso, en lo restante solicitado.

4º.-NO HACER pronunciamiento sobre el pago de las costas devengadas.

Notifíquese la presente resolución a las partes en la forma prevenida por la Ley, llevándose testimonio de la misma a los autos principales.

Contra esta Sentencia cabe, en su caso, recurso de casación, que se deberá preparar ante esta Sección en el plazo de 30 días desde su notificación, con arreglo al art. 89.1 LJCA en la redacción conferida por la L.O. 7/2015, en relación con lo previsto en el art. 86 y siguientes LJCA .

Así, por esta Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

PUBLICACIÓN.- Leída y publicada la anterior sentencia por el Ilmo. Sr. Magistrado Ponente, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su pronunciamiento. Doy fe.